

Los otomíes de Michoacán en el contexto de la diversidad cultural

*Aída Castilleja**

Los otomíes comparten con los mazahuas, además de una importante franja del límite oriente del territorio michoacano, condiciones similares en cuanto a la manera en la que han figurado en el ámbito regional y estatal y, en términos más generales, en la diversidad cultural y las relaciones con el Estado nacional en función de su condición étnica. Las relaciones entre otomíes y mazahuas de Michoacán se explican tanto por filiación lingüística, como por una historia compartida de largo aliento durante la cual, no obstante las permanentes condiciones de dominio por grupos hegemónicos, han mantenido sus respectivas lenguas y su distinción cultural. Relaciones que, en el presente, adquieren características singulares y dinámicas configuradas por su inserción en la realidad regional y por el papel que en ello juegan las identidades étnicas. Para una cabal comprensión de estos pueblos, es necesario tener presentes también las relaciones con sus vecinos del Estado de México y de Querétaro. En la geografía nacional Michoacán es el estado con menor número de hablantes de otomí (0.3% del total de 268, 871 hablantes de esta lengua a nivel nacional), en tanto que Hidalgo y Estado de México concentran el 81.2% (Lastra, 2006:25).

Los otomíes fueron parte, antes de su migración a tierras michoacanas, de poderosos señoríos cuyos territorios se extendían en lo que hoy día son los estados de Hidalgo y el Estado de México (Herrejón, 1978). Numerosos sitios arqueológicos distribuidos en una amplia franja del oriente michoacano dan cuenta de la ocupación en tiempos previos y durante la etapa militar del poderío tarasco. Una evidencia destacada de aquel tiempo la tenemos en la zona arqueológica enclavada entre San Felipe y Ziráhuato; se trata de un sitio matlatzinca construido hacia 850 d.C., previo a la expansión del poderío tarasco. Los otomíes, actualmente asentados dentro de los límites de la entidad, formaron parte del poderío uacúsecha que se expandió del siglo XIII al momento de la conquista española, ocupando una posición estratégica en la beligerante y cambiante frontera tarasca-mexica, período en el cual se sucedieron guerras, alianzas, desarticulación de señoríos.

* Investigadora de tiempo completo adscrita al Centro INAH Michoacán. Doctora en antropología.



Proceso de resistencia cultural y defensa de sus territorios que, con características particulares, también se dio desde el inicio y a lo largo de los tres siglos de la vida colonial, en el siglo XIX cuando líderes otomíes participaron activamente en la guerra de Independencia y hasta la actualidad. Proceso que también ha estado marcado por una creciente fragmentación de lo que, otrora, habría sido un *continuum* territorial de población hablante de lenguas otopames que se extendía –con densidad no uniforme– en el altiplano central del territorio nacional actual (Albores, 1998; Lastra, 2006). Resistencia y coexistencia de tradiciones culturales disímbolas que quedaron plasmadas en la cruz atrial del pueblo cabecera de San Felipe; siendo la cruz una de las marcas de la evangelización, los nativos incrustaron un espejo de obsidiana al centro de este poderoso símbolo. Reelaboración que también se amalgamó en las maneras de llevar y controlar el culto de otras imágenes religiosas, como las que han mantenido su residencia en la capilla del hospital edificada en el siglo XVI en esta misma cabecera. Reelaboración y apropiación de espacios que, como proceso vigente y no exento de tensiones, se expresa en las modalidades de la organización comunitaria, en sus formas de autoridad y gobierno, en el acceso a bienes en propiedad común, en una lengua que ha ido silenciándose y busca recuperarse.

Uno de los sustentos medulares de los pueblos indígenas han sido sus bienes en propiedad común. En el México independiente de la segunda mitad del siglo XIX, las tierras comunales fueron fuertemente afectadas por las leyes de Reforma y desamortización. La expansión de haciendas mineras y agrícolas también ocasionó la merma de estos bienes en propiedad común. El reparto agrario que inició en la segunda década del siglo XX trajo consigo una mayor fragmentación de los territorios, diferenciación étnica y vecindamiento, coexistiendo viejas y nuevas formas de tenencia de la tierra: comunal, ejidal y pequeña propiedad. El saldo ha sido una atomización y retracción sustantiva del área de distribución de los asentamientos otomíes de Michoacán. Ello ha incidido en importantes transformaciones en las modalidades de su organización y las relaciones con sus entornos sociales y políticos, en los ámbitos regional y estatal, en las cuales el factor étnico ha figurado tardía y débilmente. Algunos cambios de las últimas dos décadas han favorecido una mayor visibilización y reivindicación étnica, lo que explica una mayor presencia y atención por parte de instituciones estatales y federales abocadas a la población indígena, una mayor participación en instancias de representación de pueblos indígenas y su inclusión en materia legislativa.

Es sabido que los cuatro pueblos indígenas de mayor presencia histórica en el estado son los mazahuas, nahuas, otomíes y purépechas y que, entre ellos, existen fuertes diferencias no sólo por



el tamaño de su población, sino por las características y la extensión de sus territorios. Aun cuando en términos de diversidad cultural todos deberían tener el mismo reconocimiento y que, por lo tanto, esas diferencias no deberían marcar inequidades, lo cierto es que la mayor proporción de los purépecha respecto a los nahuas, mazahuas y otomíes, han marcado distinciones en términos de atención y diseño de políticas públicas que suelen orientarse a los grupos con mayor presencia numérica, colocando en desventaja a los grupos étnicos demográficamente minoritarios. No obstante las reformas constitucionales de 1992 que definieron a nuestro país como nación multicultural y el actual contexto del reconocimiento de la diversidad étnica y de la interculturalidad han generado condiciones favorables para evitar que dichas diferencias se reproduzcan, aún quedan rezagos por remontar.

Los otomíes y los mazahuas de Michoacán, por las condiciones del habla de sus respectivas lenguas maternas, están catalogados como pueblos cuya lengua se encuentra en un proceso de extinción acelerada (CDI, 2008), en tanto que las lenguas nahua y purépecha presentan mejores condiciones de reproducción. La variantes del otomí en la entidad ha sido considerada por el INALI como una lengua en proceso de extinción, alerta que coincide con lo afirmado por Lastra (2006), estudiosa de las lenguas otopames. Uno de los indicadores de la problemática de las condiciones de reproducción de esta lengua es la edad de sus hablantes. Quienes hablan otomí son adultos mayores de 50 años; la población entre los 20 y los 40 años, aunque declara comprenderla, en la práctica habla sólo algunas palabras, sin trasmitirla a sus hijos, esto explica que la población joven sea el grupo de edad de la población en el que difícilmente se registran hablantes de otomí (Lastra, 2006). Esta misma autora, al reconocer su condición de lengua en extinción, destaca la importancia de la variante del otomí en Michoacán; por ello más, allá de atender a cifras absolutas y relativas del número de hablantes, debe atenderse a la importancia de su distinción lingüística.

Lo anterior, además de dar cuenta de la merma del número, distribución y proporción de hablantes de estas lenguas, es un factor que debe tenerse presente para evitar transferir esta situación a su existencia como pueblo indígena. El fenómeno de disminución de hablantes de lenguas indígenas, que bien merece ser estudiado en detalle y tener en cuenta en el diseño de políticas públicas orientadas a su fortalecimiento, no necesariamente equivale *vis a vis* a la pérdida del carácter e identidad étnica de estos pueblos.

Los otomíes en el contexto regional



Los otomíes, hoy día, en su gran mayoría están concentrados en el municipio de Zitácuaro y dispersos en distintos poblados en municipios vecinos como Ocampo y Tuxpan. Registros coloniales dan cuenta de que su distribución –como pueblos en encomienda, haciendas, estancias– se extendía hacia el noreste, abarcando los actuales municipios de Hidalgo, Senguio, Tlalpujahuá, Ucareo y Maravatío (Fernández, 2008: 58). Una somera revisión de cifras censales relativas a población hablante de las distintas lenguas indígenas en Michoacán de 1940 a 2005 deja ver que el otomí es la lengua que más ha decrecido; merma proporcionalmente más alta a la registrada en el caso del habla de sus vecinos mazahuas. Esta situación, que no es privativa de los otomíes, es consecuencia –por lo menos en parte– de un largo período de devaluación o ignorancia de la diversidad cultural en el cual la condición de ser indígena ha estado asociada a un sentido de atraso, discriminación y desigualdad social, así como a políticas públicas que, como el indigenismo, han tenido un acento integracionista como en su momento fue la castellanización y el consecuente desplazamiento de las lenguas indígenas. Cinco décadas atrás, el número de hablantes de otomí triplicaba los 732 hablantes registrados en 2000; esta cantidad representaba apenas el 0.6% de los 121 849 hablantes de lengua indígena en el estado (INEGI, 2000). Del total de hablantes de lengua indígena en Michoacán, las lenguas de los cuatro pueblos históricamente asentados en la entidad representan el 97.8%, en tanto que el 2.2% restante corresponde a hablantes de lengua indígena que han migrado a la entidad en tiempos recientes. Para fines de este documento los datos censales corresponden al XII Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2000) y, salvo aclaraciones particulares, corresponden a población de cinco años y más hablante de lengua indígena. Cifras de la CDI reportan cantidades o proporciones distintas, por lo general más elevadas, en razón de ponderaciones específicas al tomar como referencia, entre otras, cifras totales de población, cifras absolutas y relativas de población hablante de lengua indígena (población de cinco años y más y población total de hogares cuyo jefe es hablante de alguna lengua indígena), categorías y agrupaciones de municipios en función de la cantidad y distribución de población indígena. La cifra de hablantes de otomí, de por sí magra, incluye otomíes procedentes de estados vecinos que, en tiempos recientes, han llegado a diversas ciudades o campos agrícolas de Michoacán en busca de empleo.

La ciudad de Zitácuaro es el centro rector de la región de la cual forman parte los otomíes de Michoacán; es –por el número de sus habitantes–, la quinta ciudad más importante de los 113 municipios de la entidad. Esta ciudad es un centro político, administrativo y comercial por excelencia cuya presencia llega a municipios del oriente y de la Tierra Caliente de la entidad, así



como a otros pertenecientes al Estado de México. Es centro de confluencia de relaciones entre núcleos de población muy diversos en su tamaño, jerarquía político-administrativa y composición étnica. En la organización territorial de las dependencias oficiales dedicadas a la atención de los pueblos indígenas figura como sede de oficinas regionales tanto del ámbito federal como estatal.

Las desventajosas condiciones de integración en el ámbito regional han incidido –entre otros rubros– en la poca visibilidad de los otomíes en términos de su participación en la política municipal. Visibilidad difusa que habría sido el resultado –entre otros factores– de políticas públicas con poca o desigual atención a pueblos indígenas, así como de un débil autoreconocimiento de los propios otomíes. Ello bien puede explicar el porqué el Centro Coordinador Indigenista –entonces INI, ahora CDI– se estableció en Zitácuaro hasta finales de la década de 1980, casi treinta años después del primer CCI en Michoacán, instalado en la ciudad de Uruapan en 1963; el de Zitácuaro fue el último centro de este tipo que se constituyó en la entidad. Este CCI precede –con mucho– a la oficina regional de la Coordinación Interinstitucional de Atención a Pueblos Indígenas, dependencia estatal que se instituyó en 2002, desde los inicios de la administración del antropólogo Lázaro Cárdenas. Esta coordinación fue el antecedente de la actual Secretaría de Pueblos Indígenas, constituida como tal en la actual administración a cargo del maestro Leonel Godoy; dependencia que ha dado continuidad al Consejo de Representantes de Pueblos y Comunidades Indígenas, cuya constitución y funcionamiento han sufrido una accidentada trayectoria.

Otro sector de la administración pública en apoyo a los pueblos indígenas es el de educación y fortalecimiento de sus respectivas lenguas. Hay esfuerzos, aunque desfasados en tiempo respecto a otras zonas indígenas de la entidad, para fortalecer la enseñanza del otomí como segunda lengua en las escuelas primarias bilingües de la zona. La Universidad Intercultural e Indígena de Michoacán, que está por completar el tercer año de formación de su primera generación de estudiantes en la sede en la región purépecha, inició en el presente ciclo (2011-2012) los cursos en la zona mazahua-otomí, dos años después de la puesta en marcha en la zona nahua. Otra vía ha sido la permanencia de la radiodifusora XETUMI que, bajo la tutela de la CDI, opera desde Tuxpan transmitiendo señal a la zona mazahua y otomí.

Los otomíes se han hecho presentes en el contexto regional en situaciones de conflicto por la defensa de sus territorios con, por lo menos, dos vertientes: una de ellas frente a agentes externos a las comunidades como fue la planta Rexcel (antes Resistol), especializada en la industria del aglomerado de madera y otra en la que las entidades en disputa son las mismas comunidades



indígenas. En el primer caso la instalación de la planta industrial a principios de la década de 1980, además de haber representado amenaza y despojo de las tierras en propiedad común, como en su momento también lo fueron las haciendas, detonó serios problemas en materia de explotación de los recursos forestales. En el segundo caso, se ha tratado de conflictos por el agua de los manantiales y la zona arqueológica entre San Felipe de los Alzati y Ziráhuato de los Bernal, cuya solución no ha sido definitiva. Como resultado de este tipo de conflictos, se generaron formas de organización y resistencia en defensa de sus tierras, de sus recursos y su gobierno local. En este contexto inicia la labor del centro coordinador; el escenario cambiaría años después con la mayor visibilización de los pueblos indígenas en el marco de políticas públicas federales y estatales.

Ello explica expresiones con un matiz de reivindicación étnica como lo fue el apoyo y la adhesión a la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, en los años ochenta del siglo pasado en el contexto del conflicto con la planta industrial (Zárate, 1987). Han sido experiencias que, por otra parte, han incidido en divisiones internas manifiestas en la participación y composición de los gobiernos locales, sin lograr consolidar formas de organización en torno a su condición étnica.

La inserción de los pueblos otomíes en la actividad económica de la región se da a través de actividades productivas en sus respectivos territorios y la participación en el mercado laboral. Años atrás, como reporta el trabajo de Fabila (1955) y los testimonios recabados en campo, había una mayor diversificación de las actividades productivas que ahora ha sido aminorada por la primacía que ha tomado el cultivo de flor de nochebuena, con un destino eminentemente comercial. Además de la floricultura (cultivo de nochebuena y gladiola principalmente), otras actividades productivas son la agricultura de temporal, la fruticultura, la alfarería y productos artesanales de reciente creación como los elaborados con el okoxal (hoja de pino). Así mismo, Fabila registró una importante cantidad de talleres y personas dedicadas a la producción alfarera –jarros, ollas, cazuelas– en Curungueo y San Felipe. Actualmente esta producción ha decaído y se oferta en comercios para el turismo alineados a la carretera. La manufactura de textiles otomíes prácticamente ha desaparecido, a no ser la producción para el autoconsumo o para finalidades rituales de las propias comunidades. Además de estas actividades económicas, la migración a la ciudad de México y a diversos destinos de la unión americana constituyen parte de las estrategias de sobrevivencia de las familias de la zona.

El aprovechamiento de recursos forestales ha pasado, a lo largo de más de cien años, por períodos de alta explotación detonados por la actividad minera, la expansión de la red ferroviaria, la instalación de la planta industrial de Rexcel y por la tala clandestina que, de manera permanente,



hacen propios y extraños en áreas de bosque que pertenecen a comunidades otomíes, generando conflictos cuya solución dista de ser efectiva.

La intensificación del cultivo de nochebuena ha llevado a colocar al estado de Michoacán, y particularmente al pueblo de San Felipe, como primer productor de esta flor en el mercado nacional; sin embargo, ello ha venido aparejado al creciente problema de la intermediación que deriva en condiciones desventajosas para los productores. Este cultivo, que se lleva a cabo en numerosos invernaderos que han transformado el paisaje, ha generado nuevas formas de organización entre productores, cambios en la organización del trabajo que incluyen el pago por jornal y en el acceso a recursos naturales (tierra y agua).

Organización territorial y recursos naturales

Los otomíes están asentados en una porción del eje neovolcánico transversal. Elevaciones de diferentes altitudes y pendientes, valles intermontanos con suelos aptos para la agricultura y disponibilidad de fuentes de agua son algunas de las características más destacadas del entorno natural. Los bosques de coníferas no presentan un grado uniforme de conservación y han sido permanentemente asediados por la tala ilegal y excesiva de especies maderables. Una porción de los bosques de las comunidades de San Felipe y Curungueo forma parte del área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, desde inicios de la década de 1980. La reserva fue declarada por la Unesco, en julio de 2008, como patrimonio de la humanidad en la categoría de patrimonio natural.

Los otomíes del oriente michoacano han mantenido una organización territorial caracterizada por agrupaciones de localidades en torno a cuatro pueblos reconocidos como cabeceras: San Felipe de los Alzati, Zirahuato de los Bernal, Curungueo y San Cristóbal. Los tres primeros forman parte del municipio de Zitácuaro y el último pertenece al municipio de Ocampo. San Felipe fue, en el período colonial, el centro inicial a partir del cual se desprendieron los restantes; a su vez, de cada uno de ellos derivaron los caseríos hoy conocidos como manzanas con sus respectivos nombres; en el siglo XVII, luego de haber sido pueblo en encomienda, este pueblo figura como república de naturales y, por lo tanto, con gobierno propio, similar a San Mateo, hoy Crescencio Morales su vecino mazahua. Así, por ejemplo, San Felipe está conformado por siete de estos asentamientos y el pueblo cabecera. Las relaciones entre estos centros de población se expresan en intensidad variable en distintos ámbitos de la vida social: civil, agrario, productivo, ceremonial, así como en las



relaciones que entablan con instituciones oficiales para la gestión y el acceso a programas y recursos públicos. En la administración civil, los pueblos cabecera figuran como jefaturas de tenencia y, en términos agrarios, son cabecera de comunidades que comparten tierras en propiedad colectiva (tierras comunales y ejidos), distinguiéndose por tener o haber tenido una clara composición indígena. El gobierno civil y las modalidades de la representación agraria coexisten con otras instituciones que, en el ámbito comunitario, tienen a su cargo la organización ceremonial a lo largo del ciclo anual, aunque pueden extenderse por un lapso mayor según decida la comunidad. Algunas de ellas siguen un patrón afín a las mayordomías y a los sistemas de cargo cívico-religioso en los cuales el juez y el fiscal han tenido un lugar de primera importancia; estas instancias de organización también han tomado la forma de comités o comisiones.

En el ámbito de la vida ceremonial se evidencia la vigencia de vínculos y jerarquía entre la cabecera y sus manzanas, como es el caso de la fiesta patronal cuya sede es cada uno de los pueblos mencionados. La organización del ciclo ritual, además de incidir en la integración entre localidades que conforman una comunidad, incorpora y actualiza la importancia de lugares como los manantiales y ciertos cerros que son, por excelencia, lugares sagrados donde tienen lugar acciones rituales relevantes como el lavado de la ropa de los santos y el cambio de cargos religiosos, tal como ocurre en ocasión del cambio de cargo en el Cerro Grande, en la celebración de la Santa Cruz. La integración también se expresa a través de danzas y ejecuciones musicales que muchas veces involucran a personas originarias de distintas manzanas o del pueblo cabecera; entre las cuadrillas de danzantes destacan las de santiagueros y las de las pastoras. Se expresa también en la entrega de grandes cirios que son presentados a manera de ofrendas, así como en la organización para la preparación y distribución de comida y bebida que, como los atoles y el cende, tienen un carácter eminentemente ritual. En estos vínculos también figuran las relaciones de parentesco, lo cual define un tejido social que bien puede ser considerado como un factor de cohesión interna.

El Carnaval (*ëne* en otomí, que significa juego) es una de las celebraciones que integra el mayor número de cabeceras y manzanas reconocidas como otomíes. Marca el inicio de la Cuaresma en el calendario ritual y se lleva a cabo, durante varios días, con la participación alternada de los pueblos y manzanas de San Felipe, Curungueo y San Cristóbal. Las cuadrillas de toritos y viejos, con sus respectivos encabezados, están formadas por jóvenes emparentados o vecinos entre sí. Las visitas entre pueblos y manzanas responden a invitaciones recíprocas que se llevan a cabo en una secuencia claramente establecida. Es una festividad en la que han tenido lugar reelaboraciones singulares, en la cual el desorden y el conflicto, a través del juego, se hacen presentes en



representaciones jocosas de personajes y situaciones que han marcado momentos del pasado reciente de los pueblos y otros que son del presente inmediato (Oliveros, 2010).

La distinción de la variante del otomí de Michoacán, relevante en términos lingüísticos, no impide inteligibilidad entre hablantes de otras entidades, como se constata en santuarios a donde acuden en ocasión de visitas rituales como el del Señor de Araró, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, y el de San Felipe del Progreso en el pueblo del mismo nombre, en el Estado de México. Así también sucede en eventos organizados por dependencias públicas cuya labor está orientada a los pueblos indígenas. En estos espacios se comparte afinidad y distinción cultural, aun cuando la comunicación también se dé en español.

Por su contigüidad geográfica es común que en foros o reuniones oficiales en el rubro de atención a pueblos indígenas, se convoque de manera conjunta a los otomíes y a los mazahuas, lo cual no necesariamente se traduce en participación conjunta ni en acuerdos compartidos. Así ha sido en foros oficiales de consulta para el plan estatal de desarrollo, para la ley de derechos y cultura indígena, la planeación de juzgados indígenas o, como ya se mencionó, para fines de instalación y operación de oficinas regionales de dependencias públicas. Desde hace cuatro años han venido llevándose a cabo, a iniciativa de distintas instituciones, un Encuentro Intercultural de los Pueblos Otopames y de la Tierra Caliente de Michoacán. No obstante el objetivo de estos encuentros ha sido generar un espacio de participación e interacción entre pueblos indígenas del oriente de la entidad, donde se conozcan y discutan problemáticas regionales, estos eventos no han logrado consolidar una dinámica propia, ni la participación constante de estos pueblos y dependen, fundamentalmente, de tareas que asumen las dependencias participantes.

La tendencia de disminución del habla otomí es parte de un proceso que Bartolomé define como descaracterización cultural (1997:75), distinguiéndolo –pero no desligándolo– de otros procesos que configuran la identidad étnica. Este planteamiento explica por qué, al considerar el criterio de autoadscripción o de otros referentes culturales de la identidad, hay una importante proporción de quienes se asumen como otomíes no obstante no hablan dicha lengua. Este desfase entre condición de habla de lengua indígena e identidad étnica evidencia los sesgos frecuentes en las políticas públicas al basar sus indicadores exclusivamente en el número de hablantes de lengua indígena, sea en números absolutos o relativos, agregados o a nivel de individuos. Por ello en cifras, indicadores y en la cartografía nacional y estatal, los otomíes de Michoacán figuran como un débil componente de la diversidad cultural; llama la atención que la propia CDI, en el texto *Indicadores*



básicos sobre la población indígena (2008), considera a los otomíes en la categoría de grupos migrantes a la entidad y no en la de grupos originarios.

Lo expuesto en este breve recuento de los otomíes de Michoacán ha pretendido mostrar cómo la diversidad étnica en este estado está aparejada a una diferenciación en términos de condiciones de vida, de relaciones interétnicas y de su articulación con los respectivos contextos regionales, así como de su relación con las instituciones del Estado. Diferenciación a la que contribuyen factores de índole diversa –demográficos, territoriales, productivos, organizativos, identitarios– que, de no ser considerados pueden incidir en mantener las condiciones desventajosas e inequidad de los pueblos indígenas minoritarios territorial y demográficamente en la entidad. Poner el énfasis en la dinámica de las relaciones interétnicas como factor de primer orden en la configuración de identidades étnicas permite dejar atrás aproximaciones esencialistas que poco abonan a la comprensión de la complejidad de las condiciones actuales de estos pueblos. Los contrastes entre los pueblos indígenas de Michoacán se expresan no sólo en términos de las características que los distinguen culturalmente, sino también en las relaciones que entablan entre ellos y con la realidad social de la que forman parte, evidenciando lo que Lameiras (1990) refirió como la persistencia multiforme de los pueblos indígenas.

